

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

| | |
|-------------------|---|
| DEMANDANTE | : JORGE MARIO RUIZ VÉLEZ |
| DEMANDADO : | : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES |
| TIPO DE PROCESO | : ORDINARIO |
| RADICADO NACIONAL | : 05-001-31-05-004-2019-00295-01 |
| RADICADO INTERNO | : 056-21 |
| DECISIÓN | : ADICIONA, ORDENA, REVOCA, ACLARA Y CONFIRMA |
| ACTA NÚMERO | : 110 |

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

De conformidad con el poder especial otorgado por la Dra. ANA BEATRIZ OCHOA MEJÍA (en calidad de representante legal de la sociedad PROTECCIÓN S.A.), a la Dra. GLADYS MARCELA ZULUAGA OCAMPO. Por cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 74 y 75 del CGP se le reconoce personería.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE la ineficacia del traslado que hizo el actor al Régimen de Ahorro Individual. Como consecuencia se condene a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a devolver a Colpensiones sus cotizaciones con sus correspondientes rendimientos que se hubieran dado en el periodo que

estuvo afiliado. Se le ORDENE a Colpensiones a admitir a mi poderdante como afiliado al Régimen de Prima Media y a recibir sus cotizaciones con los rendimientos solicitados. Y se condene en costas procesales.

Como supuestos facticos con que sustenta sus pretensiones, narra que nació el 28 de julio de 1960; realizó aportes al ISS; el 5 de febrero de 1998 se trasladó a PORVENIR S.A. y el 1º de mayo de 2004 se trasladó a PROTECCIÓN S.A.; para el traslado de fondos, recibió un funcionario de PROTECCIÓN S.A., que no le dio toda la información necesaria. El 7 de febrero de 2019 le solicitó PROTECCIÓN S.A. la proyección de la pensión; y el 18 de febrero de 2019 le solicitó a Colpensiones aceptara el traslado de régimen pensional, la cual fue negada por faltarle menos de 10 años para pensionarse; y el 28 de febrero de 2019, PROTECCIÓN S.A. negó dar la proyección pensional porque se debía actualizar el bono pensional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 18 de febrero de 2021, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia del traslado del demandante del entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES a PORVENIR S.A., realizado el 9 de febrero de 1998, así como el traslado que realizó entre fondos con la sociedad PROTECCIÓN S.A. realizada el 1º de junio año 2004. En consecuencia, se genera el regreso automático al Régimen de Prima Media administrado por COLPENSIONES, entendiéndose que estuvo allí afiliado a dicho régimen de manera permanente y sin solución de continuidad. CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A., para que proceda a devolver o retornar a COLPENSIONES, todas las sumas que recibió con ocasión del traslado del demandante a su satisfacción y equivalencia dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firmeza de esta decisión, a recibir Colpensiones las cotizaciones y aportes y rendimientos financieros que integran la cuenta de ahorro individual y se incluirá en el retorno las cuotas o pagos de administración, los pagos de seguros, reaseguros y pagos destinados al fondo de pensión de garantía mínima, estos últimos indexados desde su causación hasta el momento del pago a Colpensiones. CONDENÓ a PORVENIR S.A., a devolver a Colpensiones, a su satisfacción y equivalencia dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firmeza de esta decisión, las cuotas o gastos de administración, pagos de seguro y reaseguro, pagos al fondo de pensión de garantía mínima, estos últimos indexados desde su causación hasta el momento del pago, estos componentes en el caso del AFP PORVENIR del aporte corresponderán al tiempo en que estuvo afiliado el demandante a dicho

fondo. Le ORDENÓ a Colpensiones a reactivar la afiliación del demandante por cuenta de esa entidad en el Régimen de Prima Media, brinde todas las garantías de la afiliación, reciba todos los valores de la cuenta a su satisfacción y equivalencia y ajuste el histórico laboral de aportes sin solución de continuidad. Y CONDENÓ en costas a PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la sociedad PORVENIR S.A. en su recurso de apelación, manifiesta que no comparte la decisión de declarar la ineficacia de la afiliación a PORVENIR S.A., porque no obra en el proceso prueba que respalde la omisión de la información dada al momento del traslado, toda vez que en la prueba documental, el demandante suscribió de su puño y letra, que tomaba la decisión de trasladarse con pleno conocimiento de ley; que el acto jurídico suscrito al momento de diligenciar la vinculación a PORVENIR, goza de plena validez y fue producto de la voluntad de ambos contratantes, y no se tachó de falso.

Advierte que, cuando el demandante decide trasladarse entre las administradoras de fondos de pensiones demandadas, PORVENIR S.A. hizo entrega de todos los dineros que el demandante tenía en la cuenta de ahorro individual, por lo que no hay en estos momentos vigencia con el demandante, en cuanto al reconocimiento de otra prestación y no cuenta con fondos disponibles de las semanas o cotizaciones que haya realizado, al ser a PROTECCIÓN S.A.

Frente al pago de las cuotas de administración, considera que estos descuentos se hicieron conforme lo establece los arts 20 y 104 de la Ley 100 de 1993; que se desconoce que el demandante se le cubrió no solo en el riesgo de vejez, sino que en el transcurso en que estuvo afiliado, se le cubrió el riesgo de invalidez y sobrevivencia. Que la Corte Suprema de Justicia ha dado aplicación a los art. 1746 del Código Civil y art 963 del Código de Comercio, que hablan de las restituciones mutuas y que el bien administrado debe ser devuelto en el estado en que se encontraba, sin haber sufrido ninguna clase de deterioro, pero en este proceso, se le entrega a PROTECCIÓN S.A. unos rendimientos considerables, frente a los cuales se les hizo una buena administración, por lo tanto, no se debe ordenar la devolución de las cuotas de administración.

Por su parte, **el apoderado de PROTECCIÓN S.A.**, apela parcialmente la sentencia, en lo que respecta a la orden de trasladar a Colpensiones lo descontado por comisión de administración y prima de seguro previsional, bajo el argumento, que se tratan de descuentos autorizados en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 y operan para ambos regímenes y porque durante el tiempo que el demandante estuvo afiliado a PROTECCIÓN S.A., se administraron los dineros depositados en su cuenta de ahorro individual con diligencia y cuidado, y con el certificado que obra en el plenario se evidencia que los rendimientos financieros ascienden a un 280%. Que se debe hablar de prestaciones acaecidas, según la teoría que reposa en la sentencia 31989 de 2008.

Frente al cobro del 3% destinado para comisión de administración y financiar las primas de seguros de invalidez y sobrevivencia, opera la prescripción por ser un concepto de tracto sucesivo causando por la periodicidad que impone la ley. Y se trata de un concepto que no financia la prestación de vejez y el art. 113 de la Ley 100 de 1993, no dispuso que el traslado de régimen comprendiera el reintegro de las sumas percibidas por gastos de administración y primas de seguros previsionales.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de Colpensiones, solicita que no se acceda a las pretensiones de la demanda y se revoque la sentencia por se tomada en contravía del artículo 2° de la Ley 797 de 2003, modificadorio del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993; que si bien afirmó el demandante que el RAIS, no le proporcionó una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información, se debió haber tenido en cuenta que la asesoría que deben suministrar los fondos ha tenido varias etapas de evolución y que la asesoría brindada a la demandante era la exigida al momento del traslado, sin que sea razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen; que la decisión tomada desconoce el principio de sostenibilidad financiera.

En caso de ser confirmada la sentencia, solicita se garantice el traslado de todo concepto de dinero que repose el actor en la cuenta de ahorro individual conforme a las sentencias SL 4964 y SL 4989 de 2018, SL 1421, SL 1689 y SL 1452 de 2019, y se ordene el traslado de las cuotas de administración, gastos de administración, aportes al fondo de pensión de garantía mínima, para que se garantice el financiamiento de la futura pensión.

Y la apoderada de PROTECCIÓN S.A. considera improcedente la orden de trasladar la cuotas de administración y prima de seguros previsionales bajo el entendido que son descuentos autorizados por el art. 20 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 7 Ley 797 de 2003, el cual faculta a las AFP para realizar la deducción del 3% sobre el 16% de los aportes, y de donde el 3% descontado se usa, para cubrir los gastos de administración y pagar la prima del seguro previsional, la cual opera en ambos regímenes; que obra prueba de los rendimientos de la cuenta de ahorro individual de la parte demandante, dando a entender que los mismos fueron debidamente administrados; que con la orden dada en la sentencia, se estaría constituyendo en un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones, por recibir una comisión que ni siquiera es destinada a financiar la pensión de vejez de la parte actora, y más porque se están trasladando los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, fruto de la buena gestión de administración realizada por PROTECCIÓN, por lo que mi representada tiene derecho a conservar esta comisión como restitución mutua a su favor y no hay razón para tenérsela que trasladar a Colpensiones; que Protección S.A. tiene derecho a conservar la comisión de administración, porque en aplicación del art. 1746 del CC, si la consecuencia de la ineficacia y/o nulidad de la afiliación es que las cosas vuelvan al estado anterior, en estricto sentido las consecuencias serían que el contrato de afiliación nunca existió, Protección S.A. no debió administrar los recursos de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos que produjo dicha cuenta no se causaron y no existió el cobro de una comisión de administración, pero como el artículo en mención habla de las restituciones mutuas, intereses, frutos y del abono de mejoras, no se puede desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y unas mejoras, producto de la buena gestión de la AFP; que en caso de aplicarse en estricto sentido la teoría de la nulidad del derecho privado mediante la restitución completa de las prestaciones, se llegaría a la conclusión que si la comisión nunca se debió haber descontado, y nunca debieron haber existido rendimientos en la cuenta de ahorro individual, y como sustento invoca apartes de la sentencia 31.989 de 2008; que la Superintendencia Financiera en concepto del 17 de enero de 2020, indicó que cuando se declara judicialmente la nulidad y/o ineficacia de la afiliación debe darse aplicación al artículo 7 del Decreto 3995 de 2008, respetando la destinación de los aportes pensionales realizados y la gestión de administración desarrollada por la administradora, y la misma entidad considera.

Que tampoco se debe trasladar la prima del seguro previsional porque el porcentaje ya fue girado a una administradora para que en caso de un siniestro, la compañía pagara una suma adicional. La prima fue pagada mes a mes a la aseguradora que imposibilita la devolución y el traslado a Colpensiones, porque la aseguradora es un tercero de buena fe.

En caso de confirmarse la sentencia, y su representada deba asumir con su propio patrimonio los descuentos realizados por comisión de administración, se estaría en presencia de una condena en perjuicio de PROTECCIÓN S.A., que se debe revisar a la luz de una responsabilidad civil y en este proceso no fue materia de prueba. Que el cobro del 3% destinado a la comisión de administración opera la prescripción. Solicita que su representada no sea obligada a devolver la comisión de administración y las sumas adicionales de la aseguradora, y solo sea ordenado el traslado de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en apelación: i) Si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si la sociedad PORVENIR S.A. debe trasladar los gastos de administración y seguros previsionales; iii) Si PROTECCIÓN S.A. debe trasladar las cuotas de administración y las sumas de los seguros y reaseguros. Y en el grado jurisdiccional de consulta, se deberá analizar: i) Si hay lugar adicionar la sentencia, en el sentido que el traslado de las cuotas de administración y los seguros previsionales debe ser debidamente indexadas y el porcentaje de garantía de pensión mínima es con cargo de los propios recursos de PROTECCIÓN S.A..

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que el demandante no es beneficiario del régimen de transición por edad, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 33 años de edad al haber nacido el 28 de julio de 1960 (fl. 88); cotizó al ISS desde el 3 de enero de 1983 al 31 de enero de 1998 (fls 27 a 30); solicitó traslado PORVENIR S.A. el 9 de febrero de 1998 (fl. 140 y 215), y se trasladó a PROTECCIÓN S.A. el 1º de abril de 2004 el cual tuvo efectividad el 1º de junio de la misma anualidad (fl. 133).

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por el accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado que recibió en la empresa una reunión u asesoría, en febrero de 1998; en esa visita le dijeron que el ISS estaba en riesgo de desaparecer y

ofrecían la alternativa del fondo privado para no correr este riesgo; la asesoría duro media hora y había un grupo de personas, le dijeron que trasladaban las semanas que tenían cotizadas; no le dijeron que su pensión iba a ser más alta en PORVENIR S.A. que en el ISS, en su momento se sintió satisfecho con la información que le brindaron, tuvo la oportunidad de preguntar pero no preguntó; no lo obligaron a firmar, era consciente del acto que estaba realizando; la motivación para trasladarse no fue el monto de la pensión sino que el ISS fuera a desaparecer y la motivación para demandar es el monto de la pensión. Se trasladó a PROTECCIÓN S.A. porque estaba inconforme con la calidad del servicio de PORVENIR S.A. y él llamó a PROTECCIÓN S.A., fueron a la oficina y le llevaron el formulario para el traslado, en esa oportunidad no le dijeron nada especial porque él se quería cambiar de fondo.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria** por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”,* y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá*

realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”,
o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados-** en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...”.** (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994 permite al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;...”.

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aun operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877, 4811 de 2020, SL 1217 y 782 de 2021, y como juez constitucional en las sentencia STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PORVENIR S.A. (administradora que realizó el traslado del régimen pensional) no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de trasladarse de Colpensiones, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se genera que se haya violentado el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvieron efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad PORVENIR S.A. aporte copia del formulario de afiliación; certificado de afiliación, empleadores que realizaron aportes y valores

trasladados a PROTECCIÓN S.A.; historial de vinculaciones, consulta multifondos, relación histórica de movimientos, relación de aportes y comunicados de prensa (fl. 215 a 270), lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de ineficacia del traslado del demandante a la sociedad PORVENIR S.A., así como el traslado entre fondos, realizado a la sociedad PROTECCIÓN S.A., y la ordena dada a PROTECCIÓN S.A., de trasladar las cotizaciones, aportes y rendimientos financieros que integran la cuenta de ahorro individual.

2. De los efectos de la ineficacia

- Frente a la devolución de las **cuotas de administración debidamente indexados**, hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece las sentencias SL 1688 y 1689 de 2019, y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos lo ahorrado o se hubiere hecho pagos posteriores a la cotización, no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron y fueron administrados por la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliado la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de manejo es administrada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la

Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

- **Las sumas adicionales de la aseguradora** hay lugar a devolverlas **debidamente indexada**, porque la CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 se dijo: *“La administradora tiene el deber de devolver al sistema ..., sumas adicionales de la aseguradora,.”*

Con fundamento en lo anterior, se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia, que le ordenó a las sociedades PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. la devolución de estos conceptos, por el tiempo que estuvo el demandante en cada fondo, sin embargo se ADICIONARÁ la sentencia, en el sentido que las cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora debe trasladarse debidamente indexadas.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. Y PROTECCIÓN S.A. en la suma de \$908.526 en cabeza de cada una de ellas, por no haber salido avante los recursos de apelación interpuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en el sentido de **ORDENARLE** a las sociedades PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. a realizar la devolución de las cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora por el tiempo que el demandante realizó aportes en cada uno de dicho fondo, ambas debidamente indexadas.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. Y PROTECCIÓN S.A. en la suma de \$908.526 en cabeza de cada una de ellas.

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-004-2019-00295-01
Radicado Interno 056-21

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 079 del 10 de mayo
de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>